

somete á los tribunales judiciales, nada es mas natural que la declaracion de utilidad que afecta tan directamente al bien de la sociedad, y en donde la ejecucion de las obras no podrá llevarse á cabo, sino con el auxilio de impuestos extraordinarios ó por medio de contratos celebrados por la autoridad administrativa correspondiente al poder Legislativo; que la designacion de propiedades á que haya de aplicarse la expropiacion, el justiprecio de ellas y su pago, supuesto que miran á la muda ejecucion de una ley, sean del resorte del Ejecutivo, y que la declaracion de expropiacion pertenezca al poder protector de las garantías para que examínese si se han llenado ó no las formalidades precisas á la designacion de propiedades, siendo como debe ser su exacto y debido cumplimiento, no una vana forma, sino una positiva garantía del individuo contra los abusos del poder. Por esto no sea extraño que como principios esenciales se pongan como requisitos indispensables para la expropiacion: Primero, Ley del poder Legislativo que autorice la ejecucion de las obras. Segundo, designacion de propiedades hecha por la autoridad administrativa. Tercero: Declaracion de expropiacion por la autoridad judicial; y cuarto: Indemnizacion previa á la ocupacion de la propiedad expropiada, siendo ellos, por lo tanto, la materia de los cuatro primeros títulos.

En las tareas legislativas como en el ejercicio del poder administrativo y judicial, nunca serán por demas los requisitos que aseguren el acierto en las resoluciones; ellos ilustran la inteligencia del que manda, reprimen con el convencimiento los impulsos del corazon cuando se desvian del sendero de la justicia; dan respetabilidad al poder público, y siembran la confianza y el bienestar en la sociedad. A este noble fin se encaminan, pues, los expedientes previos y demas ritualidades antecedentes á la formacion de las leyes, á las decisiones administrativas y á las sentencias de los tribunales. Bien convencida la comision de esta verdad al fijar los requisitos á que deben sujetarse las autoridades constitucionales para tomar la parte que les es debida en la expropiacion, ha adoptado aquello que sin enervar la accion del poder, lo aleja de la arbitrariedad y de la precipitacion, causas de graves y lamentables males, y se dan aun con los auxilios de las ciencias exactas, el cúmulo de luces bastantes para el acierto y justificacion en sus resoluciones, en cuanto en la débil razon de la flaca humanidad.

Por otra parte, la estricta observancia de esos requisitos es ya una necesidad social en un pueblo en donde es un derecho de los ciudadanos tomar parte en los asuntos que afectan directamente al país; en donde la garantía de la propiedad respecto del poder público ha sido por desgracia una mera teoría; en donde la manifestacion de las ideas sobre las verdaderas faltas de los funcionarios es un derecho; y en donde, por fin, se halla tan desarrollado el instinto de fé, que á la simple voz del charlatanismo se corre tras una mejora material, que tanto mas se aleja cuanto mas se desea alcanzar, causando males á los ciudadanos inermes sin provecho alguno de la sociedad, y solo en beneficio de ávidos especuladores.

Para fijar la indemnizacion, la comision ha partido de la base de los capitales sobre los cuales las fincas rústicas y urbanas pagan ó han debido pagar al Erario la contribucion de tres al millar; base justa, si se considera que tanto los particulares como la Nacion ó el poder público, han consentido en ella, y que si en caso de expropiacion resultare algun perjuicio á uno ó á otro, este se halla suficientemente remunerado con lo que los causantes han pagado de menos respecto á lo debido pagar por el legítimo y verdadero valor de la propiedad, ó con lo que las arcas hayan recibido de mas, cuando aquella satisfaga el impuesto por un capital superior á su legítimo precio. Además, los propietarios, con el noble objeto de evitar un juicio en un evento futuro, son enteramente libres para hacer las debidas manifestaciones sobre el verdadero y legítimo valor de sus fincas, de lo que resultará por una parte un aumento positivo en las rentas fiscales, y por otra, no haciéndolo, por el simple hecho se entiende quedar ellos conformes en que en caso de expropiacion, se compute el valor de ellas por el capital sobre el cual causan la contribucion de tres al millar, ú otra que se imponga legalmente sobre la propiedad raíz.

Respecto al pago de la indemnizacion, se ha ceñido al texto constitucional, y siguiendo su espíritu, consúltase se haga previamente á la ocupacion, no careciendo el propietario en ningun caso de los frutos legales de su capital, y sin cuya consignacion no puede ser obligado al abandono de su posesion. Nada mas natural que cesando la causa cese igualmente el efecto. La causa de expropiacion, es, pues, la pública utilidad. Luego nada mas justo ni natural que la propiedad vuelva á su antiguo dueño, no ejecutándose las

obras en un tiempo dado, ó dándole destino diferente en beneficio particular. Por esto es de rigurosa justicia el derecho que tiene para solicitar la reversion de su propiedad, del dominio público al privado, y de necesidad en una ley de expropiacion reglamentar el ejercicio de este derecho. Tal es, pues, la materia del título V, en donde la comision ha procurado conciliar la celeridad del procedimiento con lo que demanda la estricta justicia, sin omitir por esto lo que de esencia exige la naturaleza de los juicios, los medios que proporcionan la aclaracion del hecho y la conveniente y oportuna aplicacion del derecho.

En el curso natural de los acontecimientos humanos que aceleran ó retardan la marcha de las sociedades en la carrera de la civilizacion, hay casos en los que la estricta observancia de las formas enerva ó destruye la accion del poder, causando graves y positivos males á la misma sociedad. Entonces son un mal, y la naturaleza de las cosas, de acuerdo con la conveniencia pública, aconsejan su limitacion ó entera supresion para dejar expedita la accion del poder, á fin de obrar de la manera que lo demanden las circunstancias, y sin mas norte que el bien de la generalidad. En las expropiaciones pueden presentarse casos de esta naturaleza. Luego nada mas natural que preverlos, y en una ley reglamentar la manera con que hayan de obrar las autoridades en estos casos excepcionales, respetando siempre las ideas esenciales que entrañan las palabras expropiacion por causa de utilidad pública, y determinar los requisitos únicos á que hayan de sujetarse, cuando la urgencia de tomar posesion de las propiedades particulares no permitan la estricta observancia de las formas. Hé aquí la materia sobre que versa el título 6º de la ley, y la razon que ha tenido la comision para ponerlo.

En él se considera tambien otro caso, que por su misma naturaleza, jamas podria subordinarse á las reglas ordinarias, y que sin embargo, puede y debe presentarse con frecuencia, importando á su vez una verdadera expropiacion. Tal sucede cuando una congregacion de familias establecida en dominio particular, se dirige al soberano solicitando se le erija en poblacion políticamente organizada. Entonces la justicia y los derechos naturales del hombre deben sobreponer el bien de muchos al de uno solo, pero tambien es necesario que el poder público indemnice competentemente al expropiado. Para este

solo caso, con el fin de desterrar toda influencia local, y para dar á los actos de la autoridad todos los caracteres del acierto é imparcialidad, se ha dado al soberano Congreso de la Union una intervencion exclusiva, dejando á cargo de las autoridades de los Estados solo la ejecucion de la ley.

Por último, por vía de aclaracion, la comision juzgó conveniente establecer ciertas reglas generales para evitar toda interpretacion que extendiese la ley á casos que no ha querido comprender, y que una vez admitida, introduciria el desorden en algunos ramos reglamentados ya por leyes especiales. Esto supuesto, propone á V. S. el siguiente proyecto de ley:

LEY SOBRE EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA.

Artículo 1º Toda propiedad es inviolable: en consecuencia nadie podrá, ser turbado ó inquietado en el uso ó aprovechamiento de ella.

Art. 2º La expropiacion solo podrá hacerse por causa de utilidad pública y previa indemnizacion segun los requisitos siguientes:

I. Ley del poder Legislativo, autorizando la ejecucion de obras de utilidad pública.

II. Designacion hecha por la autoridad administrativa de las propiedades particulares, á las cuales haya de aplicarse la expropiacion.

III. Declaracion de expropiacion hecha por la autoridad judicial.

IV. Indemnizacion previa á la ocupacion de la propiedad expropiada.

TITULO I.

DE LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE UTILIDAD COMUN.

Art. 3º Ninguna obra de utilidad nacional, como caminos generales, canales, ferrocarriles, canalizacion de rios, puentes y obras de este género, ya se hagan por la autoridad administrativa de la Union, por los particulares, compañías nacionales, extranjeras ó mixtas, para las que sea precisa la expropiacion, no podrán emprenderse sino mediante la autorizacion del Congreso de la Union.

Art. 4º Para conceder esta autorizacion, se formará en el Ministerio de Fomento, por la seccion respectiva, un expediente que contenga: 1º, El proyecto de la obra en que se hará ver el trazo general de la línea de tra-

bajo. 2º, El presupuesto de gastos. 3º, Los planos respectivos. 4º, Una memoria descriptiva que dé á conocer el objeto de la empresa y las ventajas que resulten al público de la ejecución de la obra. 5º, La tarifa de derechos, cuando se solicite concesion de estos, para cubrir los gastos de la obra proyectada.

Art. 5º El Ministerio de Fomento anunciará al público las obras proyectadas, por medio de los periódicos que se publiquen en la capital de la República y en los del Estado, para que los ciudadanos, y en especial los de los distritos por cuyo territorio se extienda la línea de trabajos, puedan hacer las observaciones que crean convenientes sobre la utilidad de la empresa, en el término de un mes, contado desde la fecha de la publicación de los avisos en la capital de la República.

Art. 6º Estas observaciones se harán por escrito, dirigiéndose directamente al Ministerio de Fomento en la capital de la República, y en los Estados por conducto de los gobernadores respectivos á quienes se presentarán, ó á las autoridades subalternas, cuidando estas de remitirlas oportunamente á los gobernadores, para que por su medio lleguen al Ministerio de Fomento.

Art. 7º Concluido el término de que habla el art. 5º, se unirán estas observaciones al expediente, y el Ministerio de Fomento, oyendo previamente á dos ingenieros civiles, extenderá su dictámen motivado sobre la utilidad de la obra y sobre los diversos puntos á que pudieren dar lugar las observaciones recibidas, remitiendo todo el expediente con el dictámen al Congreso de Unión, en el término de un mes.

Art. 8º El Congreso, tomándolo inmediatamente en consideración, lo pasará á la comisión respectiva.

Art. 9º La comisión despachará, presentando dictámen, á mas tardar dentro de quince días.

Art. 10. Previos los demas requisitos que para toda ley exige el art. 70 de la Constitución, se expedirá la que autorice la ejecución de la obra proyectada. Esta autorización importa la declaración de la obra de utilidad pública.

Art. 11º Siendo la obra particular de un Estado ó de un municipio, el expediente será formado en la secretaría del gobierno del Estado respectivo. El dictámen de que habla el art. 7º, será dado por el gobernador, y la ley que autorice la ejecución de la obra por las legislaturas respectivas.

TITULO II.

DE LA DESIGNACION DE LAS PROPIEDADES PARTICULARES A LAS QUE HAYA DE APLICARSE LA EXPROPIACION.

Art. 12. Publicada la ley, los peritos encargados de la ejecución de las obras presentarán al ministerio de Fomento en el término de quince días, el plano de las propiedades ó edificios particulares cuya ocupación se juzgue necesaria para la ejecución de las obras autorizadas, marcándose en las partes respectivas de este plano los nombres de los propietarios que hayan de ser expropiados.

Art. 13. El ministerio de Fomento dirigirá copias de las partes respectivas de los planos por conducto de los gobernadores de los Estados ó gefes políticos de los territorios, á los proyectos en cuya demarcación estén situadas las propiedades designadas, y estos por medio de anuncios que fijarán en los parajes de costumbre y publicarán en los periódicos de cada Estado ó territorio, avisarán á los interesados para que tengan conocimiento del plano recibido.

Art. 14. Los interesados en el término de quince días contados desde la fecha del primer anuncio, harán por escrito ante los gobernadores, gefes políticos de los territorios ó prefectos respectivos, las observaciones ó reclamaciones que creyeren convenientes, exponiendo las razones por las que á su juicio crean no ser necesaria la ocupación de su propiedad.

Art. 15. Los gobernadores de los Estados ó gefes políticos de los territorios, dentro de igual término, contado desde que espire el de que habla el artículo anterior con vista del plano y de las observaciones, consultando previamente con personas instruidas, examinarán las cuestiones que bajo el punto de vista artístico, de economía política ó de intereses local, puedan presentarse, y expondrán su dictámen razonado sobre las propiedades demarcadas que á su juicio haya necesidad de ocupar, y lo mandarán con el expediente al gobierno de la Union por conducto del ministerio de Fomento.

Art. 16. El gobierno de la Union, no faltando ningun requisito de los que se habla en el presente título, con vista de los planos, el expediente y dictámen razonado, dictará su resolución definitiva, designando las propiedades particulares que deben ser cedidas para las obras de utilidad pública.

Art. 17. Faltando alguno de los requisitos, el gobierno mandará practicar todas ó algunas de las solemnidades prescritas, dictando en seguida su resolución definitiva.

Art. 18. Siendo la obra particular de un Estado ó municipio, la presentación de planos se hará en la secretaría del gobierno de cada Estado, las observaciones en las prefecturas ó subprefecturas respectivas en cuyo territorio estén situados los bienes demarcados, el dictámen razonado por los prefectos y el gobierno del Estado, y la designación de las propiedades particulares que deben ser ocupadas para las obras de pública utilidad.

TITULO III.

DE LA DECLARACION JUDICIAL DE EXPROPIACION.

Art. 19. Determinadas por el gobierno de la Union las propiedades, se pasará el expediente á la Suprema Corte de Justicia.

Art. 20. La primera sala, de plano, sin forma de juicio y sin necesidad de citar á los interesados de la expropiación, supuestas la ley del Congreso y la designación hecha por el gobierno de la Union en el término de tres días contados desde el recibo del expediente, pronunciará la expropiación de los terrenos ó edificios designados por el gobierno, conteniendo el auto los nombres de los propietarios.

Art. 21. Se mandará testimonio del auto de expropiación á los jueces de primera instancia en cuyo territorio estuviesen situadas las propiedades expropiadas, para que se publique, insertándose en los periódicos y fijándose en los parajes acostumbrados, para conocimiento del público y de los interesados.

Art. 22. Faltando alguno de los requisitos de que habla el título anterior, la primera sala se limitará á declarar no haber lugar á pronunciar el auto de expropiación, por faltar los requisitos que expresará el mismo auto, devolviendo el expediente al gobierno para que subsanados los requisitos reforme ó ratifique la determinación de las propiedades.

Art. 23. El auto de expropiación produce el efecto de trasladar á la nación el dominio de los bienes expropiados y de que en su virtud los derechos de los reclamantes á la cosa expropiada, se trasladen sobre la indemnización, quedando aquella enteramente libre de todo gravámen ó responsabilidad á que estuviere afecta.

Art. 24. Siendo la obra particular de un Estado ó municipio el auto de expropiación, se pronunciará por la primera sala de su respectivo tribunal superior.

TITULO IV.

DE LA INDEMNIZACION PREVIA Á LA OCUPACION DE LA PROPIEDAD.

Seccion primera.—Del modo de fijarla.

Art. 25. La indemnización se fijará siempre en una suma determinada de dinero.

Art. 26. Para fijarla, el ministerio de Fomento á mas tardar en el término de quince días, contados desde que se reciba el expediente de la Suprema Corte de Justicia, pedirá por conducto de los gobernadores ó los administradores de rentas en cuyas demarcaciones estuviesen situadas las propiedades expropiadas, noticia pormenorizada sacada de los libros de sus respectivas oficinas, y del valor de las fincas sobre que sus dueños estuvieran pagando la contribución de tres al millar.

Art. 27. Los gobernadores ó gefes políticos, en el término de un mes, tendrán remitidas al ministerio de Fomento las noticias que les mandaren los administradores, las que vendrán confrontadas por los jueces letrados de partido y autoridad política local, asentándose al calce de la noticia el correspondiente con acuerdo, que firmarán dichas autoridades.

Art. 28. Recibidas las noticias, el gobierno de la Union determinará el valor de la indemnización, que será el capital sobre el cual las fincas expropiadas hubiesen pagado la contribución de tres al millar y una tercera parte mas, por vía de indemnización de daños y menoscabos que se causen por la expropiación.

Art. 29. Si las propiedades particulares hubiesen estado exentas del pago de contribuciones de tres al millar ó por cualquier otro motivo no estuviesen valuadas, el valor de la indemnización se fijará por dos peritos nombrados el uno por el gobierno y el otro por el dueño, y estos procederán á la valuación en el término de un mes, contado desde la fecha de su nombramiento.

Art. 30. Si los dueños, despues de una interpelación hecha por la autoridad administrativa, rehusaren hacer el nombramiento de perito, se participará á la Suprema Corte de Justicia, y esta inmediatamente proce-

derá á hacer el nombramiento, participándolo al gobierno.

Art. 31. En caso de discordia, se suministrarán los valúos hechos por los peritos, y la semisuma de ambos valores será el de la indemnización que haya de pagarse al expropiado y una tercera mas por vía de indemnización.

Art. 32. Una vez fijado el valor de la indemnización por uno de los modos de que hablan los dos anteriores artículos, se tendrá por definitivamente hecho sin ulterior recurso.

Art. 33. Cuando hubiese necesidad de ocupar solo una parte de la propiedad para fijar su valor, se entrará en convenio por el gobierno con los interesados, teniendo siempre presente el valor total que la finca tenga, segun el capital sobre el cual se hubiese estado pagando la contribucion de tres al millar, la mayor ó menor extension de la parte designada, la calidad, su relacion con el todo, y el aumento ó disminucion de valor que el resto de la propiedad sufra inmediatamente como efecto de la ejecucion de las obras proyectadas.

Art. 34. No habiendo convenio, el Ministerio de Hacienda lo participará á la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y esta en el término de tres dias hará el nombramiento de perito valuador, dando aviso al gobierno.

Art. 35. El perito nombrado presentará la valuacion en el término de un mes contado desde la fecha de su nombramiento, y se hará saber á los interesados por el ministerio de hacienda para que expresen por escrito si se hallan ó no conformes con la valuacion.

Art. 36. No estando conformes, el gobierno ocupará toda la propiedad, pagando como precio de la indemnización el capital sobre el cual se hubiese pagado la contribucion de tres al millar, y una tercera parte mas por indemnización de perjuicios.

Art. 37. En el caso de que habla el artículo anterior, el gobierno, reteniendo la parte designada, podrá vender el resto en almoneda pública al mejor postor, aplicando su precio al pago de la indemnización.

Art. 38. Si la indemnización designada por el perito excediese por la ofrecida por el gobierno, este pagará los honorarios del perito; y si fuese igual ó inferior, se pagará por las partes.

Art. 39. Cuando las propiedades pertenecientes á menores privados de su administracion, ausentes ú otras personas incapaces,

los tutores, curadores ó legítimos representantes harán el nombramiento de perito en el caso del art. 29, y en el del 33 podrán entrar en convenio sin necesidad de previa autorizacion judicial.

Art. 40. Perteneciendo los bienes á Estados ó territorios, ó fueren de aquellos que el artículo 27 de la Constitucion permite tener á las corporaciones civiles y eclesiásticas, el nombramiento de perito en el caso del artículo 29 se hará respectivamente por los gobernadores, gefes políticos, síndicos de los ayuntamientos y administradores, pudiendo estos mismos entrar en convenio en el del artículo 33.

Art. 41. Cuando la obra fuere particular de un Estado ó municipio, el gobierno respectivo determinará el valor de la indemnización, y el nombramiento de perito en su caso se hará por la primera sala de su respectivo superior tribunal, y en el caso de que habla el artículo 33, el convenio se celebrará siempre con el gobierno, quien llegada la vez del artículo 36, ocupará toda la propiedad, dejando á las municipalidades interesadas solo la parte ó partes designadas, vendiendo el resto en almoneda pública, al mejor postor, y aplicando el precio al pago de la indemnización.

Seccion segunda.—Del pago de la indemnización.

Art. 42. Determinado el valor, si no excediere de la cantidad de veinticinco mil pesos, la indemnización á cada propietario se pagará por el tesoro federal, previamente á la ocupacion de la casa expropiada.

Art. 43. Excediendo de esta cantidad, será satisfecha en el término de un año, contado desde la fecha en que se otorgue al interesado la correspondiente escritura de reconocimiento de su capital, con hipoteca expresa y señalada de alguna renta de las que pertenezcan al gobierno general, abonándose al interesado desde igual fecha, el rédito anual anticipado, á razon de un seis por ciento.

Art. 44. Si los interesados rehusaren recibir el pago, ya del capital ó de los réditos anticipados de un año en su caso, libradas que sean las órdenes de pago á la Tesorería general por el ministerio de Hacienda, se entenderá hecha la consignacion legal y se procederá á la ocupacion.

Art. 45. Reconociendo la finca expropiada capitales á depósito irregular ó á censo, con hipoteca expresa y señalada de la misma,

la paga real y efectiva del capital y réditos se mandará hacer á los acreedores hipotecarios, dueños de los capitales, justificándolo con sus correspondientes escrituras, y al dueño de solo el valor de la parte libre.

Art. 46. A este efecto, antes de librarse las órdenes de pago, el dueño dará conocimiento al ministerio de Hacienda de todos los capitales que reconozca su finca con hipoteca expresa, designando los nombres, domicilio y vecindad de cada uno de los acreedores y monto de sus respectivos créditos.

Art. 47. Cuando la finca expropiada fuese litigiosa, hecha la consignacion legal para que á su vez sea distribuido por la autoridad competente, segun las reglas del derecho comun, se procederá inmediatamente á la ocupacion.

Art. 48. Cuando la obra fuese particular de un Estado ó municipio, el pago de la indemnización se hará por la tesorería ó municipio directamente interesados, librándose las órdenes por los gobernadores respectivos, sin cuyo requisito no se entenderá hecha la consignacion legal, ni podrá procederse á la ocupacion.

TÍTULO V.

DEL RECURSO DE REVERSION.

Art. 49. Pasado un año contado desde el dia de la ocupacion de la casa expropiada, si no hubieran principiádose las obras, ó dándose destino diferente y en beneficio particular, los antiguos dueños ó sus sucesores podrán pedir la reversion de la propiedad ó su dominio particular, ocurriendo por escrito á la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 50. Se dará conocimiento de esta peticion al procurador general de la nacion, quien la contestará dentro del tercero dia, dándose con estos dos escritos por sustanciado el recurso para prueba.

Art. 51. Para recibir la que convenga á los derechos de las partes, se abrirá el término de quince dias improrrogables, pasados los cuales se unirán las probanzas á los autos, y sin mas trámites, se pronunciará el auto que los declare por conclusos, citándose á las partes para definitiva, pudiendo éstas desde la citacion ocurrir á la secretaría á imponerse de las pruebas, sin que en caso alguno puedan sacar el expediente.

Art. 52. La sentencia, previos los informes á la vista, se pronunciará dentro de ocho

dias, contados desde la fecha de la última citacion, haciéndose saber á las partes y participándose al gobierno.

Art. 53. Contra esta determinacion no se admite mas recurso que el de responsabilidad, que se seguirá y determinará con arreglo á las leyes comunes.

Art. 54. Cuando la expropiacion se hubiese verificado á favor de un Estado ó municipio, conocerá de este recurso la primera sala de su respectivo superior tribunal, siendo representado el Estado ó municipalidad por el fiscal del mismo, con quien se entenderá la sustanciacion del recurso.

Art. 55. Si el antiguo propietario ó sucesor obtuvieren en la sentencia, y aun no hubieren recibido el precio de la indemnización, serán puestos inmediatamente en posesion de la cosa, quedando á su beneficio el rédito anual anticipado.

Art. 56. Si hubieren recibido ya el precio de la indemnización, lo devolverán á las tesorerías respectivas en el término de un mes, contado desde la notificacion de la sentencia, y no haciéndolo, por este mero hecho caducará esta, quedando la autoridad administrativa en libertad para disponer libremente de la cosa, pudiendo venderla al mejor postor, en almoneda pública, sin que en caso alguno la venta pueda verificarse en menos cantidad de la que dió como precio de la indemnización.

TÍTULO VI.

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES.

Art. 57. Cuando hubiese urgencia de tomar posesion de las propiedades particulares por causa de utilidad pública, el poder legislativo, omitiéndose los requisitos prescritos en el título 1º y sujetándose solo á lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Constitucion, expedirá la ley que autorice la ejecucion de las otras.

Art. 58. El ejecutivo, omitiendo los requisitos de que habla el título 2º, inmediatamente despues de la publicacion de la ley, designará las propiedades particulares cuya cesion juzgue neccsaria para la ejecucion de las obras de pública utilidad.

Art. 59. Supuesta la ley y designacion en propiedad, el tribunal judicial hará dentro de tres dias, contados desde el recibo del expediente, la declaracion de expropiacion, determinando igualmente la cantidad que

provisionalmente debe depositarse como precio de la indemnización.

Art. 60. Determinada la cantidad, el ejecutivo hará la consignación legal, librando á la oficina respectiva las órdenes para que mantenga en depósito la suma señalada por el tribunal. Practicado lo cual, se procederá á la ocupación.

Art. 61. Después de tomada la posesión, se fijará la indemnización definitivamente, mediante las formalidades prescritas en el tit. 4º.

Art. 62. Fijado definitivamente el precio, se procederá á su pago de la manera que previenen los artículos 42 y 43, con mas los réditos computados á razón de un 6 p. 100 anual, desde el día de la ocupación.

Art. 63. Perteneciendo la obra á un Estado ó ayuntamiento, la ley se dará por las legislaturas, la designación de propiedades por los gobernadores, el auto de expropiación por la sala primera de sus respectivos superiores tribunales, quienes designarán también la cantidad que provisionalmente deba depositarse como precio de la indemnización.

Art. 64. Ninguna congregación de menos de doscientas familias establecidas en terrenos pertenecientes á dominio particular, podrá erigirse ni solicitar se le erija en población políticamente organizada, sin que haga constar el expreso y libre consentimiento del propietario.

Art. 65. Teniendo el número legal de familias, solo el poder legislativo de la unión, sujetándose al artículo 70 de la Constitución y previa iniciativa de los gobernantes, legislaturas ó diputaciones respectivas, podrá expedir la ley que haga la erección, designando en ella: primero el nombre de la población; segundo, la extensión de terreno que por fundo legal deba pertenecerle por los cuatro vientos y á que haya de aplicarse la expropiación; tercero, la expresa declaración de indemnización al dueño, por el tesoro federal ó de los Estados en cuyo territorio se encontraren las nuevas poblaciones.

Art. 66. Expedida ley, los gobiernos de los Estados ó territorios, ó el ejecutivo de la unión en su caso, procederán á fijar la indemnización y á su pago, sujetándose á los requisitos establecidos en el lib. 4º.

PREVENCIÓNES GENERALES.

Art. 67. Cuando hubiese concesionarios de trabajos públicos, estos ejercerán todos los derechos conferidos por esta ley á la ad-

ministración, y estarán sujetos á todas las obligaciones que le son impuestas.

Art. 68. Quedan en todo su vigor y fuerza las leyes vigentes en el ramo de minería.

Art. 69. En los casos de edificios ruinosos, las autoridades administrativas y municipales procederán con arreglo al artículo 64 de la ordenanza de intendentes.

Art. 70. No quedan comprendidas en la presente ley las expropiaciones que se verifican por causa de fuerza mayor, como la inundación, el incendio y la guerra.

Art. 71. Las disposiciones de la presente ley no perjudican en manera alguna las servidumbres legales que las propiedades particulares reporten en beneficio público.

Art. 72. Las autoridades de los Estados no podrán hacer modificación alguna en la presente ley.

Art. 73. Siendo atribución exclusiva del congreso de la unión legislar en materia de expropiación, son nulas todas las leyes dadas sobre este punto por las legislaturas de los Estados.

Sala de comisiones del Soberano Congreso de la Unión.—México, Diciembre 1º de 1857.—José M. Verástegui.—López Lecadio.—Abraham Hernandez.

Se levantó la sesión pública para entrar en secreta de reglamento.

Faltaron por enfermedad los Sres. Gonzalez (D. Feliciano), Martinez de la Concha y Vallejo; y por tener licencia el Sr. Villaseñor (D. Ricardo).

Sesión del día 4 de Diciembre de 1857.

Presidencia del Sr. Olvera.

Se abrió la sesión y se leyó y fué aprobada la acta anterior.

Se dió cuenta con un oficio del ministerio de Relaciones trascribiendo uno del Sr. Fernandez del Castillo en que pide se deje el conocimiento de la causa que se le sigue á la Suprema Corte de Justicia, declarándola competente para juzgar de causas como la que se le sigue á este señor.—A la comisión de Justicia.

Se leyeron unas solicitudes de los Sres. Velasco, y Gareña y Zayas pidiendo los dos primeros la dispensa de un año en sus respectivas carreras, y el 3º la asistencia á la

Academia teórico-práctica de derecho.—Se mandaron pasar á la comisión de instrucción pública.

Se dió primera lectura á un proyecto de ley sobre pago á los empleados del gobierno federal, presentado por los Sres. Perez Fernandez y Montiel.

La comisión encargada de la reforma del reglamento, presentó el proyecto siguiente al que se dispuso la primera y segunda lectura, y se mandó imprimir.

DICTAMEN

de la comisión especial del Congreso de la Unión, nombrada para reformar el reglamento interior de la Cámara.

Señor:

La comisión especial nombrada por V. S. para reformar el reglamento de la Cámara, ha concluido ya su trabajo, con excepcion de las secciones que deberán tratar de la tesorería y secretaría del Congreso, que sin embargo están ya adelantadas, y de la parte que destinará á la contaduría mayor, y que vendrá á ser como el complemento de toda su obra.

Guiada por el antiguo reglamento, y teniendo presentes la Constitución que nos rige, la experiencia, la práctica y el espíritu que domina en la ley electoral, la comisión ha hecho cuanto ha estado de su parte para que su proyecto sea lo mas completo y adecuado que pudiera desear.

Convencida de que sin método el trabajo mas sencillo se hace difícil y lo mas claro se hace embrollado, ha dividido el reglamento en secciones, capítulos y artículos. Una especie de cuadro sinóptico hará comprender al primer golpe de vista la razón de esta división, y pondrá de manifiesto el conjunto de todo el proyecto.

Las secciones por su orden son estas: de la organización de la Cámara; de las sesiones; de las leyes; de los asuntos económicos; del gran jurado; de varias facultades constitucionales cometidas al Congreso; de la diputación permanente.

La sección primera abraza los capítulos siguientes: juntas preparatorias; de la instalación de la Cámara y de la apertura y clausura de las sesiones; de la presidencia y vicepresidencia; de los secretarios; de las comisiones; tratamiento del Congreso y sus miembros; ceremonial; guardia.

La segunda comprende: naturaleza de las sesiones; asistencia de los diputados y penas á los faltistas; asistencia de los secretarios del despacho; galerías.

La tercera contiene: iniciativa; dictámenes de comisión; discusiones; votaciones; ejercicio de la facultad del ejecutivo para opinar sobre los proyectos de ley; dispensa de trámites; adiciones y modificaciones sobre forma de las leyes.

La cuarta abraza: naturaleza de los asuntos económicos; trámites de los acuerdos económicos.

La quinta comprende: organización del gran jurado; personas sujetas á él; manera de proceder.

La sexta solo tiene un capítulo que trata de la manera de ejercer varias facultades constitucionales cometidas al Congreso.

Y la séptima contiene: nombramiento ó instalación de la diputación permanente; sus atribuciones y deberes; su régimen interior.

La comisión, al tener el honor de someter á V. S. este proyecto, no molestará su atención con un dictamen difuso, en que exponga todas las reformas y novedades que ha introducido en el reglamento, y manifieste las razones de conveniencia, necesidad ó utilidad que la han movido á hacerlas; pero se reserva para la discusión dar cuantas explicaciones se le pidan en cada caso, y cree que si ellas no satisficieren plenamente á la Cámara, servirán para ilustrar su juicio y para convencer de que la comisión no ha procedido ligeramente al adoptar aquellas reformas y novedades que se advertirán en el siguiente

REGLAMENTO

para el gobierno interior del Congreso de la Unión.

Sección primera.—De la organización de la Cámara.

CAPÍTULO I.

DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS.

Art. 1º. Luego que lleguen los diputados al lugar de las sesiones, se presentarán á la secretaría del Congreso, y en el registro que esta llevará se asentarán la fecha de su presentación, sus nombres, el del Estado ó territorio y distrito electoral que los haya nombrado, y la calle y casa de su habitación.